ARGENTINA

D. LEY 6559 (30-IV-1958, B.O. 21-V-1958), Código de Procedimientos de faltas para la Ciudad de Buenos Aires.

Este nuevo Código, que deroga el anterior Código de Faltas Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, se aplicará para el juzgamiento de las faltas, infracciones o contravenciones (terminología usada indistintamente en el texto), que se cometan en la Capital federal argentina (arts. 1º y 3º).

La característica de la tipicidad está concretamente determinada por el artículo 2º que dice: "Ningún juicio por falta, infracción o contravención podrá ser, iniciado sino por la comprobación de actos u omisiones calificados como tales por una ley, ordenanza o decreto anteriores al hecho. El procedimiento por analogía no es admisible para crear faltas ni aplicar sanciones."

El obrar culposo es suficiente para considerar punible una falta; en cambio, la tentativa no se estima punible (arts. 5º y 6º). Cuando el imputado fuera primario y las circunstancias indiquen que la pena mínima aplicable resulta excesiva, podrá imponerse una sanción menor o aún perdonarse la pena. Asimismo, cuando la infracción pudiera corregirse el juez podrá ordenar al contraventor hacerlo; en caso positivo, se tendrá por no cometida la falta; si ocurre el incumplimiento, se considerará como circunstancia agravante (arts. 7º y 8º).

Cuando se impute a una persona jurídica la comisión de una falta, podrán imponérsele las penas de multas y accesorias. Además, a sus representantes, se aplicarán las que correspondan por sus actos personales en el desempeño de sus funciones (art. 9º).

La defensa letrada no es necesaria en el juicio de faltas (art. 10).

Los jueces podrán aplicar, dice el artículo 11, las siguientes penas: Severa amonestación, que sólo podrá ser aplicada como substitutiva de la multa o arresto; multa, que no excederá de \$10.000 Mn.; arresto, que no excederá de 30 días; comiso, que comporta la pérdida de los objetos en contravención y de los elementos idóneos indispensables empleados para cometerla; clausura, que podrá ser temporaria (no mayor de 90 días) o por tiempo indeterminado, e inhabilitación, que será temporal (sin exceder de 180 días) o definitiva.

Los artículos 12 y 13, permiten la aplicación de penas alternativas y la conversión de las penas. La libertad condicional no es aplicable a las faltas (art. 14).

El artículo 16 faculta al juez, cuando la multa sea mayor de \$ 200 Mn., a permitir al infractor pagarla en plazos. El arresto se cumplirá en establecimientos especiales, pero en ningún caso el contraventor será alojado con delincuen-

tes. También se prevé el arresto domiciliario para personas de buenos antecedentes, o cuando la sanción sea consecuencia de la falta de pago de una multa (arts. 17 y 18).

Las personas que habiendo sido condenadas por una falta, incurran en otra de igual especie, dentro del término de un año a partir de la fecha de la sentencia definitiva, serán consideradas reincidentes (art. 19). La suma de las penas acumuladas por la concurrencia de varias infracciones no podrá ser mayor del máximo legal fijado para la especie de pena de que se trate, aumentado en la mitad (art. 20).

La acción penal y la pena se extinguen, prescribe el artículo 22, por la muerte del imputado o condenado; por la condonación efectuada con arreglo a las disposiciones legales; por la prescripción; y por el pago de la multa (cuando la infracción fuere reprimida exclusivamente con esa pena).

El importante renglón de la jurisdicción encuéntrase resumido en los artículos 24 al 26, del Libro II, según los cuales la jurisdicción de las faltas cometidas en la Capital federal argentina será ejercida por los jueces de faltas y por una Cámara de Apelaciones. Dicha jurisdicción es improrrogable. Los jueces no podrán ser recusados, pero deberán excusarse cuando existan circunstancias impeditivas (art. 26).

El Libro III contiene las reglas del procedimiento, que puede considerarse dividido en las siguientes etapas: actos iniciales, juicios y recursos.

“Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad policial inmediata, administrativa, competente o directamente ante el juez de faltas (art. 27).

El funcionario que comprueba una infracción librará de inmediato un acta en que se consignen los elementos del hecho punible. Dicho funcionario emplazará al infractor ante el Tribunal de faltas, después de 48 horas y dentro de los 5 días subsiguientes, bajo apercibimiento de hacerle conducir por la fuerza pública y de que se considere su incomparecencia injustificada, como circunstancia agravante (arts. 28 y 29). El acta tendrá, para el funcionario interviniente, el carácter de declaración testimonial, por lo que no deben alterar maliciosamente los hechos. En caso de que no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas por el juez como prueba plena de la responsabilidad del infractor (arts. 30 y 31).

Procederá la detención inmediata si así lo exigen la índole y gravedad de la falta, su reiteración o por razón del estado en que se hallare quien la hubiere cometido o estuviere cometiendo. Cuando existan motivos fundados para presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia, el funcionario interviniente podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para conducirlo de inmediato ante el juez (artículos 32 y 33).

Las actuaciones serán elevadas directamente al juez, a más tardar dentro de las 24 horas de labradas y se pondrán a su disposición él o los detenidos, así como los efectos comprobatorios de la infracción, si los hubiere (arts. 34 y 35). El juez podrá decretar o mantener la detención preventiva del imputado por un término que no exceda de 24 horas, así como disponer su comparecencia (art. 37).

El juicio es sumario. Dentro de las 48 horas de recibidas las actuaciones o levantadas las denuncias, se emplazará al imputado (el texto legal habla de infractor) para que comparezca ante el juez dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación. El juicio será público y el procedimiento oral, teniendo el imputado oportunidad de conocer las actuaciones labradas y de defenderse. La prueba generalmente se ofrecerá y producirá en la misma audiencia. No se aceptará la presentación de escritos. Sólo en el caso que el juez lo considere conveniente, se ordenará recoger una versión escrita de las declaraciones, interrogatorios y careos. No se permitirá en ningún caso la acción del particular ofendido como querellante.

Oído el imputado y substanciada la prueba alegada en su descargo, el juez fallará en el acto, en forma de simple decreto, y ordenará, según el caso, la confiscación o restitución de la cosa secuestrada. Cuando la sentencia fuere apelable el juez la fundará brevemente. La resolución judicial se fundará siguiendo las reglas de la sana crítica (arts. 38 al 43).

Los recursos que pueden invocarse, según los artículos 44 al 50, son:

— De apelación, contra sentencias definitivas que impongan penas de comiso, clausura, multa mayor de \$ 2.000 Mu., arresto o inhabilitación mayor de 10 días, y deberá interponerse en el acto mismo de la notificación de la sentencia. En esa oportunidad, el juez hará saber al condenado, bajo pena de nulidad, el derecho que le asiste de interponer recursos. El Tribunal de Apelaciones dentro de los 3 días de recibidos los autos, los agravios y oída la defensa del apelante dictará sentencia;

— De nulidad, contra resoluciones apelables (se deduce en la misma oportunidad que la apelación) pronunciadas con violación u omisión de las formas substanciales de procedimiento;

— La queja, que podrá interponerse directamente ante el superior cuando el juez deniegue los recursos de apelación y nulidad, o sólo el primero, o para el caso de retardo de justicia.

Finalmente, entre las disposiciones complementarias, se ordena que la ejecución de las sentencias corresponda al juez que haya conocido en primera instancia; que el juez pueda decretar medidas para mejor proveer; imponer sanciones disciplinarias, etc.